

Gobierno solicitó extender suspensión del desalojo de la megatoma por un año

A través de la Delegación Presidencial Regional presentó un “téngase presente” en la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el fin de facilitar un acuerdo entre las partes.

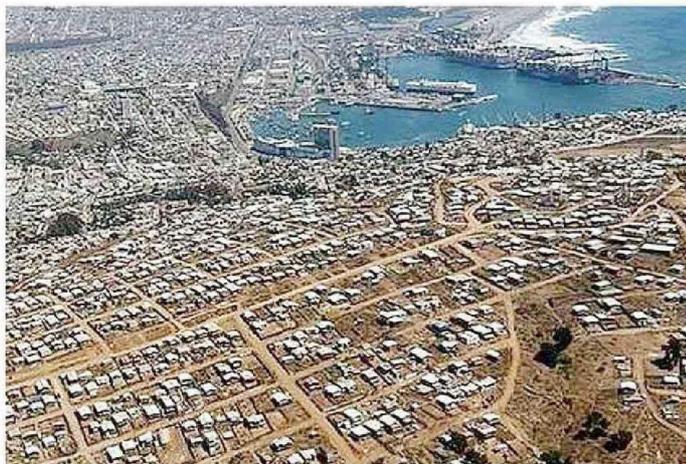
Crónica
 cronica@lidersanantonio.cl

El Gobierno, igual como lo hizo en noviembre del año pasado, trata de frenar en la justicia el desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio. A través de la Delegación Presidencial Regional (DPR) ingresó el día de ayer un téngase presente donde solicita a la Corte de Apelaciones de Valparaíso (CAV) extender la suspensión del lanzamiento del macrocampamento por doce meses.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo y el SERVIU estiman que en un año las familias que viven en las 254 hectáreas del predio pueden concluir el proceso de formación de cooperativas y materializar la compraventa del terreno a los dueños, alcanzando así una solución entre las partes.

El escrito efectúa lo solicitado por el tribunal en su último fallo, que dio plazo hasta el 31 de enero de 2025 para que las instituciones involucradas informaran de las condiciones para realizar el lanzamiento.

La delegación reportó



9 MIL 887 PERSONAS VIVEN EN EL CAMPAMENTO, SEGÚN EL CATASTRO DEL SERVIU.

que ha efectuado las coordinaciones pertinentes con los diversos organismos públicos, entre ellos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Desarrollo Social y Familia, de Bienes Nacionales y la Jefatura de Zona Valparaíso de Carabineros de Chile.

En ese marco, el téngase presente indica que, para dar cumplimiento a la sentencia, la Seremi Minvu de Valparaíso y el SERVIU regional han realizado distintas tareas, como la reali-

zación del catastro para la individualización de las personas ocupantes, así como trazar una estrategia jurídica y socialmente viable para dar una solución definitiva a este problema.

Estos organismos sostienen que avanzaron “en varios aspectos, como son el levantamiento y afirmación del interés de 67 comunidades para comprar terrenos y formar cooperativas de vivienda, con un compromiso firmado por dirigentes y 10 poblado-

res”.

Aseguraron además, están en proceso de constitución de alrededor de 30 cooperativas, que agrupan al 70% de las familias del macrocampamento. También se está realizando un estudio normativo del terreno para definir la superficie útil para las viviendas, junto con un proceso de tasación en curso para determinar su precio.

SOLICITUD

Con estos antecedentes la

31

de octubre del año pasado, el Gobierno también presentó un recurso para frenar el desalojo. No fue aceptado.

DPR solicitó a “la Corte de Apelaciones extender la suspensión del desalojo por doce meses, plazo estimado por los organismos regionales del Minvu para que las familias pobladoras y los dueños puedan alcanzar una solución”.

Al respecto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que “entendiendo lo complejo de este proceso y la responsabilidad que debemos tener con la seguridad de las personas, es que hemos solicitado extender el plazo de desalojo, considerando que mantenemos un diálogo permanente con los dirigentes de este asentamiento de manera de lograr una solución que resguarde la integridad de quienes habitan en la toma”.

Por su parte, la delegada ministerial del Minvu para el macrocampamento de San Antonio, Gloria Maira, indicó que “como ministerio estamos trabajando arduamente para generar las condiciones que permitan viabilizar un acuerdo entre las partes. Las familias están colaborando y estamos avanzando en el proceso de conformación de cooperativas para que puedan realizar la compraventa del terreno”.

Agregó que “junto con ello, hemos mantenido los canales de diálogo abiertos en todo momento con los dueños, informándoles de todos los acuerdos alcanzados con las dirigencias del macro campamento. En consecuencia, creemos fundamental que todos los actores involucrados pongan de su parte para avanzar una solución a esta materia”.

En la edición del viernes de El Mercurio de Santiago, el abogado de los dueños del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, Diego Pereira, anunció que ayer presentaría en la CAV un escrito para reactivar el desalojo al asegurar que las conversaciones estaban en “punto muerto”.